

PROPUESTA RAZONADA DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA Y URBANÍSTICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL ÁMBITO DEL PP-2, CENTRO, DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN AUTOVÍA TOLEDO NORTE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LEGANÉS (MADRID), EXPEDIENTE CS/01/2024

1. OBJETO

Es objeto de la presente memoria la justificación de la legalidad y oportunidad de la emisión por el Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico de un acuerdo mediante el que se disponga la incoación de un procedimiento de contratación pública administrativa típica de servicios de consultoría y asistencia técnica y urbanística para la redacción del proyecto constructivo de ejecución de la subestación eléctrica STR Tecnológico en el ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid), expediente CS/01/2024, conforme a lo dispuesto en el artículo 73.2 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en relación con el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2. ANTECEDENTES

I.) En relación con el consorcio.

El consorcio urbanístico denominado “PP-A del P.A.U.-2 [plan parcial de actuación del programa de actuación urbanística 2], Autovía Toledo Norte”, conocido comúnmente como “Leganés Tecnológico” y, en ocasiones, como Legatec, fue constituido el día 20 de diciembre de 1999 mediante el otorgamiento de escritura pública ante el Notario de Madrid don Javier López-Polín Méndez de Vigo al nº 2.328 de su protocolo, con la misión de desarrollar, gestionar y ejecutar de forma cooperativa entre el Ayuntamiento de Leganés y la Administración de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2.a) de la Ley de la Asamblea de Madrid 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el planeamiento urbanístico de los terrenos de uso industrial y terciario situados al noroeste del término municipal de Leganés lindantes con las carreteras M-425, M-40 y autovía de Toledo, en el ámbito del suelo urbanizable no programado denominado PAU-2, “Autovía de Toledo Norte”, del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid), a fin de implantar

un parque industrial denominado “Leganés Tecnológico”.

El consorcio ostenta la condición de entidad de derecho público integrante del sector público institucional dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, de las previstas en el artículo 2.2.a) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y goza de la consideración de Administración pública conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del mismo artículo. Está constituido por el Ayuntamiento de Leganés y la Administración de la Comunidad de Madrid, a la que está adscrito.

Conforme al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010) establecido en el Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, el consorcio constituye una unidad institucional residente a título de productor no de mercado controlado por las Administraciones públicas y ajeno a los fondos de la Seguridad Social, que está encuadrada en el sector institucional Administraciones públicas (S.13), subsector Administración regional (S.1312). A efectos de contratación pública, el consorcio tiene la consideración de poder adjudicador en la categoría de Administración pública conforme a lo dispuesto en los apartados 1.d), 2.b) y 3.a) del artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Los estatutos del consorcio fueron aprobados al tiempo de su constitución y modificados por acuerdo del consejo de administración de 23 de mayo de 2000, elevado a público mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Gonzalo Gerona Peña el día 5 de julio de 2000 al nº 2.485 de su protocolo. Posteriormente, el día 6 de noviembre de 2019 el consejo de administración aprobó una nueva modificación de los estatutos para adaptarlos a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, modificación que, si bien ha sido aprobada por el pleno del ayuntamiento de Leganés el día 30 de septiembre de 2021, no está vigente en la actualidad al estar pendiente de aprobación por la Administración de la Comunidad de Madrid y de publicación en el diario oficial Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, conforme a lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del artículo 76 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Entre las actividades que constituyen el objeto del consorcio se encuentra llevar a cabo las obras de urbanización precisas en las áreas que tiene afectas conforme al destino previsto en los planes urbanísticos, tal como se dispone en el apartado E) del artículo 5 de los estatutos.

II.) En relación con el desarrollo urbanístico.

La ordenación urbanística general del ámbito territorial de actuación del consorcio

está constituida por el Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, revisado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 22 de julio de 1999 (B.O.C.M. número 40, de 17 de febrero de 2000, suplemento). El instrumento específico de desarrollo urbanístico del área es el Programa de Actuación Urbanística PAU-2 “Autovía de Toledo Norte”, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, aprobado mediante acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid de 28 de mayo de 2002 (B.O.C.M. número 174, de 24 de julio de 2002) y modificado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 2013, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Sectorización para modificación del Programa de Actuación Urbanística PAU-2 “Autovía de Toledo Norte”, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés (B.O.C.M. número 157, de 4 de julio de 2013).

En el diseño del desarrollo urbanístico del área se diferencian tres ámbitos territoriales de actuación sucesiva: Sector 1 “Oeste”, Sector 2 “Centro” y Sector 3 “Este”.

La ordenación urbanística pormenorizada del ámbito al que se refiere el presente contrato está constituida por el plan parcial del Sector 2, Centro, del plan de sectorización Autovía de Toledo Norte, que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Leganés con fecha 29 de enero de 2015 (B.O.C.M. número 77, de 1 de abril de 2015). El planeamiento urbanístico prevé como sistema de ejecución del ámbito la expropiación, por lo que el día 30 de enero de 2020 la Comisión de Urbanismo de Madrid aprobó definitivamente el proyecto de delimitación y expropiación del ámbito (B.O.C.M. número 46, de 24 de febrero de 2020). El proyecto de parcelación del Sector 2, Centro, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local con fecha 13 de octubre de 2022; dentro del mismo se localiza la parcela STR, con 1.600 m² de superficie y 1.120 m² de edificabilidad, destinada a la construcción de una subestación eléctrica que habrá de ser llamada “STR Tecnológico”.

El proyecto de urbanización original del Sector 2, Centro, fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local con fecha 10 de febrero de 2015; este proyecto no contemplaba la ejecución de la subestación eléctrica ni tampoco sus conexiones exteriores, puesto que en la conformidad técnica emitida con fecha 21 de marzo de 2017 por la empresa suministradora de energía eléctrica se preveía que estas infraestructuras fueran diseñadas y ejecutadas por la propia suministradora Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. (actualmente, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.) con cargo al consorcio, estimándose un coste de 8.333.830€, a razón de 3.316.071,15€ para la construcción de dos conexiones exteriores a 15KV y 4.341.855€ para la subestación y actuaciones de refuerzo en las instalaciones preexistentes. Sin embargo, en el año 2022 el consorcio promovió la modificación del proyecto de urbanización para incluir en su seno una conexión exterior con el ámbito territorial del programa de actuación urbanística “Leganés Norte” del propio

plan general de ordenación urbana, que anteriormente se había diseñado como proyecto independiente, e introducir algunas adaptaciones de las acometidas de servicios a la nueva parcelación aprobada el 13 de octubre de 2022, de las redes de alumbrado a la tecnología led y de la gestión de espacios naturales a los requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

III.) En relación con la contratación.

Este nuevo proyecto de urbanización ha sido aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local con fecha 17 de agosto de 2022 (B.O.C.M. número 214, de 8 de septiembre de 2022), quedando sin efecto la anterior aprobación inicial de 29 de enero de 2015 e iniciándose nuevos trámites de información pública e informes sectoriales. En este marco, el día 7 de julio de 2023 la empresa distribuidora de energía eléctrica ha emitido un informe (fechado a 30 de junio de 2023) formulando unas condiciones de conformidad técnica muy diferentes de las requeridas en el año 2017, por cuanto que demanda que a las de dos conexiones exteriores ya previstas con sendas subestaciones existentes en Carabanchel (STR Aguacate) y Villaverde (STR Parque de Ingenieros) a una tensión de 15kV, se unan dos nuevas conexiones a otras dos subestaciones más alejadas, sitas en La Fortuna (STR La Fortuna) y Aluche (STR Polígono C), y mediante líneas con una diferencia de potencial mucho más elevada (45kV).

Esta nueva conformidad técnica establece también que la ejecución de todas las infraestructuras de extensión de la red, conexiones exteriores y nueva subestación eléctrica se lleve a cabo directamente por el consorcio y no por la empresa suministradora con cargo al consorcio, de tal manera que i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. ha previsto limitar sus actuaciones a la ejecución de los trabajos de refuerzo y adecuación de las instalaciones de la red existente. Dada la complejidad técnica de las actuaciones de cuenta del consorcio, que suponen ejecutar obras tanto en su ámbito natural de actuación del municipio de Leganés, como en el municipio de Madrid, ajeno a dicho ámbito, así como la posible necesidad de tramitación administrativa de instrumentos adicionales de planeamiento y estudios sectoriales de medio ambiente, y dada también la falta de experiencia previa por parte de los servicios administrativos del consorcio en la ejecución de este tipo de trabajos puesto que todos los desarrollos urbanísticos anteriores se han gestionado conforme al modelo de ejecución por la empresa suministradora y pago por el promotor urbanístico, con fecha 27 de julio de 2023 se solicitó a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. la suscripción de un convenio que incluyera, conforme al artículo 9 del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica, la ejecución de las obras por la propia empresa suministradora con cargo al promotor. En contestación, con fecha 12 de febrero

de 2024 la empresa distribuidora denegó esa posibilidad argumentando que el consorcio debía haber realizado su solicitud desde el mismo inicio del procedimiento conforme al artículo 12.7 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, de tal manera que, para considerar la posibilidad de suscripción de un convenio de ejecución de las infraestructuras de extensión por el gestor de la red, se debería reiniciar el expediente, con el riesgo de perder la viabilidad ya obtenida o de que se impusieran unas condiciones de conformidad técnica más onerosas todavía.

De este modo, dejando aparte la red interior del ámbito, que habrá de ejecutarse conforme a las previsiones del proyecto de urbanización, el presupuesto de las obras exteriores de la red de distribución de energía eléctrica, compuestas por el refuerzo de las instalaciones existentes, que la empresa suministradora ha de ejecutar con cargo al consorcio, más las obras de extensión de la red a ejecutar por este, asciende a 13.512.921,18€, lo que supone un incremento del 60% respecto de las condiciones económicas de la conformidad técnica de 21 de marzo de 2017, según el siguiente desglose y estimación:

- Actuaciones de refuerzo de instalaciones, 821.742,78€; según las condiciones a que se sujeta la nueva conformidad técnica, el consorcio debe abonar a la empresa suministradora el 10% (82.174,28 €) en el plazo de 1 año y el resto conforme a un convenio específico a suscribir entre las partes.
- Actuaciones de extensión de red, 12.691.178,30€; este importe se ha estimado a partir de las previsiones presupuestarias de la conformidad técnica de 2017 actualizadas a la variación del índice de precios de consumo, más los costes de las dos nuevas conexiones, estimados a partir de los presupuestos de obras similares.

A tenor de estos antecedentes, el cumplimiento de las condiciones impuestas por la empresa distribuidora de energía eléctrica en su conformidad técnica de 7 de julio de 2023 requiere que el consorcio lleve a cabo directamente todas las actuaciones de extensión de la red, esto es, la construcción de la subestación eléctrica y las cuatro nuevas conexiones exteriores; para ello es necesario, como primer paso previo a la ejecución de las obras, proceder a la redacción y tramitación administrativa de los correspondientes proyectos urbanísticos y constructivos.

3. INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

En términos generales, el adecuado desempeño de la misión de ejecución del planeamiento urbanístico e incidencia en el mercado inmobiliario que el consorcio tiene

atribuida, requiere de una amplia variedad de medios especializados que cubran todas las necesidades que en el desarrollo de su actividad pueda demandar. En algunos casos, la realización de sus actividades típicas requerirá sin alternativa viable contratar con terceros determinadas prestaciones que excedan con mucho de los medios que razonablemente deba tener asignados, como es el caso de la ejecución de las obras de urbanización o los suministros de los bienes necesarios para su funcionamiento (no es razonable que el consorcio sea dueño de una empresa constructora o una fábrica de mobiliario, por ejemplo). Pero en aquellos casos en los que el desarrollo de las actividades del consorcio no dependa de la posesión de unas fuertes infraestructuras industriales, sino de unos potentes medios profesionales, se plantea de una forma más sutil la decisión acerca de si debe disponer como propios de los medios necesarios para la prestación de esos servicios o si es más conveniente acudir al mercado para la satisfacción de tales necesidades. Desde este punto de vista, en aquellos casos en que las necesidades del consorcio susceptibles de ser satisfechas mediante prestación de servicios, sean de carácter puntual, por ejemplo, la redacción de los grandes documentos de planificación, supervisión y ejecución del desarrollo urbanístico (planeamiento urbanístico de desarrollo y obras de urbanización o de infraestructuras), parece claro que es mejor solución en términos de gobernanza acudir al mercado para la satisfacción de tales necesidades, que disponer como propios de los potentes equipos de ingeniería y arquitectura necesarios.

En la actualidad, los medios personales del consorcio se limitan a los miembros del consejo de administración, cuya dedicación forzosamente ha de ser parcial dada la posición institucional de estas personas, no disponiendo adicionalmente de personal contratado alguno. Para atender al funcionamiento ordinario del organismo, el día 13 de diciembre de 2012 el consorcio celebró un contrato de gestión integral, modificado el día 3 de noviembre de 2016, con la que hoy en día es la empresa pública de la Comunidad de Madrid Planifica Madrid Proyectos y Obras, M.P., S.A. Este contrato de gestión integral incluye, además de la gerencia del consorcio, las labores administrativas y de gestión del proyecto, dirección y supervisión técnica de todas las actividades del organismo, asumiendo el control técnico, administrativo, jurídico y económico del propio consorcio, incluyendo expresamente el apoyo a las eventuales modificaciones de planeamiento, proyecto de urbanización, ejecución de obras, enajenación de terrenos, etc., pero excluyendo expresamente la redacción de determinados documentos técnicos específicos, tales como los proyectos urbanísticos o constructivos de obras.

Por otra parte, aun cuando la Comunidad de Madrid pone a disposición de los consorcios urbanísticos adscritos una unidad horizontal de gestión, la Subdirección General de Consorcios Urbanísticos de la Dirección General de Suelo de la Consejería de

Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que cubre algunos aspectos jurídicos, contables, urbanísticos y de contratación, estos medios de apoyo a la gestión son manifiestamente insuficientes para atender al conjunto de las necesidades de un consorcio en plena actividad, ya que la labor de aquella unidad, que no es colaborativa sino que pertenece a la Administración de adscripción, debe centrarse primariamente en el asesoramiento del conjunto de los consorcios y, en lo demás, debe primar la satisfacción de las necesidades de los que hayan sido disueltos y se encuentren en liquidación dado que estos, al conservar únicamente los órganos deliberantes y representativos, carecen de órganos ejecutivos propios.

En el presente caso, la prestación de los servicios de redacción del proyecto constructivo de ejecución de las obras de una subestación eléctrica requiere contar con personal que disponga de la competencia profesional requerida (Ingeniero Industrial o facultativo con atribuciones profesionales análogas). El consorcio no dispone de los medios materiales ni humanos necesarios para la prestación de los servicios, estimándose que su dotación y adquisición tendría un carácter antieconómico porque se trata de una necesidad puntual que una vez satisfecha no se va a repetir en el futuro y que no constituye el objeto principal del consorcio. Además, una hipotética contratación de personal especializado para la prestación de los servicios estaría sujeta al criterio general de satisfacción de las necesidades de personal de los consorcios mediante funcionarios y trabajadores de las Administraciones participantes, que se establece en el artículo 121 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y obligaría a obtener una autorización excepcional de contratación.

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

De acuerdo con lo que se acaba de exponer, el desempeño de la misión de ejecución del planeamiento urbanístico que el consorcio tiene atribuida, requiere que lleve a cabo directamente todas las actuaciones de extensión de la red de distribución de energía eléctrica, esto es, la construcción de la subestación eléctrica y las cuatro nuevas conexiones exteriores, a que la empresa distribuidora ha condicionado su conformidad técnica de 7 de julio de 2023. Para ello, lo primero que ha de hacer el consorcio es redactar y, en su caso, obtener la pertinente autorización administrativa de los correspondientes proyectos urbanísticos y constructivos.

Ahora bien, el consorcio carece de medios propios para la satisfacción, entre otras, de sus necesidades puntuales de redacción de los documentos técnicos que permitan impulsar la urbanización de su ámbito territorial de actuación, y más concretamente para la redacción del proyecto de ejecución de la subestación eléctrica,

que permita posteriormente proceder a la ejecución de las obras de construcción, teniendo en cuenta además que el proyecto ha de ser objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada conforme al artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con el apartado b) del grupo 4 de su anexo II, lo que demanda redactar determinados documentos técnicos necesarios para su tramitación.

Ello es debido a que la satisfacción de estas necesidades requiere una carga de trabajo intensa pero limitada temporalmente, que, sin embargo, implica disponer de variados servicios profesionales complejos (ingeniería, asesoramiento urbanístico y medioambiental) que obligan a contar con una organización más amplia de la que es razonable que organice el consorcio como propia con personal permanente, máxime teniendo en cuenta que la redacción de estos proyectos debe ser llevada a cabo por personas con habilitación y dedicación suficiente tanto por la formación exigida (Ingeniero Industrial) como por la especialización requerida (diseño de equipamientos eléctricos de media y alta tensión). Tampoco dispone el consorcio de los programas informáticos específicos y medios técnicos (diseño asistido por ordenador, sistema de información geográfico) necesarios para la ejecución de los trabajos requeridos. La dotación o adquisición de estos medios tendría un carácter antieconómico para una necesidad puntual que no se va a repetir y que no está comprendida dentro de las necesidades estructurales.

Así pues, careciendo el consorcio de los medios propios necesarios para la eficaz satisfacción de las necesidades descritas, y considerando que no es adecuada en términos de gobernanza la obtención como propia de toda la infraestructura que supondría su prestación directa, motivo por el cual no está previsto ampliar medios con esa finalidad, es el objeto del presente procedimiento la contratación de los servicios correspondientes.

5. CONTENIDO DEL CONTRATO

I.) Prestaciones.

La prestación esencial del contrato es proveer al consorcio de los servicios de consultoría y asistencia técnica y urbanística para la redacción del proyecto constructivo y el estudio de impacto ambiental de la nueva subestación eléctrica STR Tecnológico en la parcela STR del proyecto de parcelación del ámbito del plan parcial del Sector PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid), aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento

el día 13 de octubre de 2022, en las condiciones técnicas y económicas requeridas en la conformidad técnica de la empresa distribuidora de energía eléctrica del sector en su informe al proyecto de urbanización de 7 de julio de 2023, y, complementariamente, realizar cuantos trabajos y estudios sean precisos para apoyar técnica y urbanísticamente al consorcio en la tramitación de los procedimientos de conformidad técnica, evaluación de impacto ambiental y eventuales autorizaciones sectoriales, hasta la definitiva aprobación administrativa sustantiva del proyecto constructivo por la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid que permita dar paso a la ejecución de las obras. A tal efecto, tanto el proyecto constructivo como el estudio de impacto ambiental habrán de ser presentados ante los organismos competentes para su tramitación administrativa, durante la cual el contratista estará obligado a colaborar con el consorcio ejecutando los trabajos de apoyo previstos en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Las condiciones de prestación de los servicios se detallan en el pliego de prescripciones técnicas particulares del expediente de contratación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dado que los servicios a contratar están comprendidos dentro del concepto reglamentario de contratos de consultoría y asistencia, y teniendo en cuenta la complejidad de los trámites necesarios para el buen fin del proyecto constructivo, cuyas soluciones demandan por ello la consulta y toma en consideración de los criterios de diversos organismos que intervienen o fiscalizan el diseño definitivo de las obras a ejecutar (significadamente, la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid en su doble faceta de Administración competente en materia de impacto ambiental y en materia de energía), el contratista quedará obligado a presentar, dentro de los quince primeros días naturales de ejecución del contrato, un programa de trabajo justificativo del cumplimiento de las prescripciones contractuales que incluya, como mínimo, los siguientes datos expresados en diagramas de actividades-tiempos:

- a) Fijación de los trabajos que integrarán el estudio o servicio y, en su caso, de las operaciones más importantes constitutivas de dichos trabajos, así como el establecimiento de las reuniones iniciales clave con todas las partes.
- b) Determinación del equipo y medios a emplear en el desarrollo del estudio o servicio, con una planificación y coordinación de recursos humanos, materiales y equipos necesarios para la ejecución del proyecto.
- c) Estimación en períodos calendario de los plazos parciales de elaboración de los diversos trabajos incluyendo hitos y actividades clave; a estos efectos se

utilizarán como unidades de tiempos la semana y el mes.

En caso de modificación del contrato, el contratista quedará obligado a la actualización y puesta al día del programa de trabajo para adaptarlo a las nuevas prescripciones contractuales.

II.) Lotes.

Por excepción de lo dispuesto en el artículo 99.3, párrafo primero, de la Ley de Contratos del Sector Público el contrato consta de un lote único indivisible porque, aun cuando las prestaciones de redacción de proyecto de una subestación eléctrica conste de dos aspectos que pudieran ser diferenciados, la obra civil (edificio de la subestación) y la infraestructura eléctrica, se estima, en los términos previstos en el epígrafe b) del párrafo tercero de la norma citada, que la ejecución del contrato se vería entorpecida si se ejecutasen por dos contratistas diferentes puesto que, si bien la responsabilidad de la tramitación administrativa del proyecto conjunto, que implica la facultad de coordinar los equipos de trabajo, recaería en todo caso en el Ingeniero Industrial autor del diseño de la infraestructura eléctrica, la realización por separado de las prestaciones acarrearía la complicación organizativa de la inevitable superposición de trabajos, que podría afectar al diseño unitario puesto que las instalaciones eléctricas, que priorizan el diseño, obligan a la configuración de la obra civil dependiente. Además, en ningún caso la redacción separada de los proyectos supondría ahorro económico ni optimización de plazo de ejecución.

III.) Codificación del objeto.

El objeto del contrato conforme a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (Common Procurement Vocabulary, CPV) establecida en el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, modificado por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de las Comunidades Europeas de 28 de noviembre de 2007, se corresponde con la siguiente codificación:

- Vocabulario principal. División 71: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección. Grupo 713: Servicios de ingeniería. Clase 7132: Servicios de diseño técnico. Categoría 71323: Servicios de diseño técnico del proceso y la producción industriales. Subcategoría 71323100-9: Servicios de diseño de sistemas eléctricos.

El código de los servicios, tanto en la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE-2009), aprobada mediante Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, cuanto en la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Unión Europea (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté

Européenne, NACE, Rev. 2), establecida en el Reglamento (CE) nº 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006, es el siguiente:

- Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas. División 71: Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. Grupo 711: Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. Clase 7112: Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico.

El código de los servicios en la clasificación estadística de productos por actividades en la Unión Europea (CPA 2.1) establecida en el Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, modificado por el Reglamento (UE) nº 1209/2014 de la Comisión de 29 de octubre de 2014, es el siguiente:

- Sección M: Servicios profesionales, científicos y técnicos. División 71: Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; servicios de ensayos y análisis técnicos. Grupo 711: Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otros servicios relacionados con el asesoramiento técnico. Clase 7112: Servicios técnicos de ingeniería y otros servicios relacionados con el asesoramiento técnico. Categoría 71121: Servicios técnicos de ingeniería. Subcategoría 711213: Servicios técnicos de ingeniería para la energía.

El código de la unidad territorial de ubicación del lugar de prestación de los servicios en la nomenclatura estadística común de unidades territoriales en la Unión Europea (NUTS) establecida en el Reglamento (CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, modificado por el Reglamento (UE) nº 1319/2013 de la Comisión de 9 de diciembre de 2013, es el siguiente:

- Nivel 1: ES3 (Comunidad de Madrid). Nivel 2: ES30 (Comunidad de Madrid). Nivel 3: ES300 (Madrid).

IV.) Condiciones especiales de ejecución.

1/ Uso de prácticas avanzadas de gestión

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, y con la finalidad de promover el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, se establece, con el carácter de obligación contractual esencial cuyo incumplimiento sea causa de resolución, la condición especial de ejecución de carácter medioambiental vinculada a la eliminación del uso de papel y relacionada con la innovación, consistente en que el contratista habrá de implementar prácticas

innovadoras en la ejecución del contrato, como el uso de tecnologías de gestión avanzada, reducirá el uso de papel siempre que sea posible y dará preferencia a las comunicaciones electrónicas, de tal modo que cuando menos tres cuartas partes (75%) de las tramitaciones relacionadas con el desarrollo de los trabajos (relaciones con el responsable del contrato, emisión de informes y documentos contractuales, apoyo para la obtención de autorizaciones y licencias si procede, presentación de documentos, entre otras) se realice de forma electrónica y que en caso de que sea necesario utilizar papel para trámites o documentos, este provenga de fuentes sostenibles y se implementen medidas para reducir el impacto ambiental de su uso, tales como la impresión a doble cara, la utilización de papel reciclado y la minimización del desperdicio de papel.

Para la acreditación del cumplimiento de esta condición especial de ejecución, el contratista habrá de llevar un registro detallado de tramitaciones realizadas y presentar cada dos meses al responsable del contrato un informe comprensivo del porcentaje de tramitaciones realizadas de forma electrónica y en papel. La documentación acreditativa del cumplimiento de esta condición especial de ejecución deberá ser actualizada por el contratista cuantas veces lo requiera el responsable del contrato durante su plazo de ejecución, pudiendo el consorcio verificar en cualquier momento el cumplimiento revisando en su caso los registros de tramitaciones realizadas y cualquier otra documentación pertinente, que habrá de ser facilitada sin demora por el contratista.

Se justifica la exigencia de esta gestión innovadora por considerar que la utilización de prácticas sostenibles, como la tramitación electrónica y el uso de papel reciclado en la realización de las prestaciones contractuales, promueve la sostenibilidad medioambiental y el cuidado del medio ambiente en la ejecución del contrato al reducir la huella de carbono asociada con la actividad administrativa; de igual modo, la tramitación electrónica puede agilizar los procesos al eliminar la necesidad de manejar físicamente documentos en papel, reduciendo así los tiempos de espera y simplificando la comunicación entre las partes.

Esta condición especial de ejecución se configura con el carácter de obligación contractual esencial cuyo incumplimiento es causa de resolución del contrato debido a que se trata de una de las condiciones de tipo medioambiental, social o relativas al empleo previstas en el apartado 2 del artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público en orden a la inclusión obligatoria de al menos una de ellas en el pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del mismo artículo; a tales efectos, en la Administración de adscripción del consorcio resultan de aplicación las instrucciones específicas

aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 3 de mayo de 2018, por el que se establece la reserva de contratos públicos a favor de ciertas entidades de la economía social y se impulsa la utilización de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública de la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 116, de 16 de mayo de 2018), y en esas instrucciones se especifica que las cláusulas que incorporen criterios sociales, ambientales o de innovación como condición especial de ejecución de los contratos, habrán de incluir especial mención a su consideración como obligación contractual esencial cuyo incumplimiento constituye causa de resolución del contrato (apartado Séptimo, epígrafe 3.a).

2/ Estabilidad en el empleo del personal adscrito

A los mismos efectos de cumplimiento del artículo 202.1 de la ley, pero con la finalidad de combatir el paro mediante la promoción de la estabilidad en el empleo, se establece, con el carácter de obligación contractual esencial cuyo incumplimiento sea causa de resolución, la condición especial de ejecución de carácter social vinculada a la estabilidad laboral del personal que haya de ejecutar las prestaciones, consistente en que al menos un treinta por ciento (30%) de las personas adscritas a la ejecución del presente contrato tenga contrato laboral indefinido.

Se justifica la exigencia de este grado de estabilidad en el empleo por considerar que la integración estable del personal adscrito a la ejecución del contrato en una misma organización productiva, facilita el funcionamiento coordinado del equipo de trabajo y el mejor conocimiento de las características específicas, dificultades técnicas y protocolos de actuación para la realización de las prestaciones contractuales.

Para la acreditación del cumplimiento de esta condición especial de ejecución, el adjudicatario, con anterioridad a la formalización del contrato, deberá aportar el informe de trabajadores en alta de su código de cuenta de cotización en la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente al mes inmediatamente anterior al de adjudicación del contrato. Esta documentación deberá ser actualizada cuantas veces lo requiera el responsable del contrato durante su plazo de ejecución.

Como en el caso anterior, esta condición especial de ejecución se configura con el carácter de obligación contractual esencial cuyo incumplimiento es causa de resolución del contrato debido a que se trata de una de las condiciones de tipo medioambiental, social o relativas al empleo previstas en la Ley de Contratos del Sector Público para la inclusión obligatoria de al menos una de ellas en el pliego, lo que supone la aplicación, en la Administración de adscripción del consorcio, de las instrucciones de 3 de mayo de 2018, entre ellas la especial mención a su consideración como obligación

contractual esencial de las cláusulas que incorporen criterios sociales, ambientales o de innovación como condición especial de ejecución de los contratos.

V.) Cesión de contrato y subcontratación.

El contratista, previa autorización del órgano de contratación, podrá ceder a terceros los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, siempre que se cumplan los requisitos para la cesión previstos en el artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público, quedando en tal caso el cesionario subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, siempre que se cumplan los requisitos para la subcontratación previstos en el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público, quedando en tal caso el contratista sujeto a las obligaciones específicas que se establecen en los artículos 216 y 217. A tales efectos, los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, así como el nombre o el perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización. Conforme a lo dispuesto en el artículo 202.4 de la ley, todos los subcontratistas que participen de la ejecución del contrato habrán de cumplir todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte de este.

No obstante, considerando que el interés esencial del consorcio es disponer de un proyecto constructivo que pueda, tras su pertinente aprobación administrativa, servir de base para la ejecución de las obras de la subestación eléctrica STR Tecnológico, se estima que la prestación consistente en la redacción final como autor del proyecto constructivo constituye tarea crítica que no se puede subcontratar. Esta limitación de la subcontratación, debido a su trascendencia para el buen fin de la ejecución del contrato, tendrá el carácter de obligación contractual esencial cuyo incumplimiento será causa de resolución conforme a lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 211.1.f) de la Ley de Contratos del Sector Público.

VI.) Comprobaciones de la calidad.

La comprobación de la calidad del proyecto constructivo en la versión para conformidad técnica de la empresa distribuidora de la energía eléctrica se llevará a cabo mediante informe específico de los servicios administrativos del consorcio justificativo de la adecuación de la solución constructiva propuesta por el contratista para la satisfacción de las necesidades administrativas que justifican la contratación, y de la adaptación del proyecto a las condiciones del informe de conformidad técnica de 7 de

julio de 2023. Para la comprobación de la calidad de las versiones posteriores del proyecto, de la evaluación de impacto ambiental y de los restantes documentos pertinentes, se atenderá al buen fin de la tramitación administrativa del proyecto.

Al tiempo de la recepción del contrato a su conclusión, el representante designado por el órgano de contratación acreditará la calidad de las prestaciones ejecutadas mediante la comprobación formal de la existencia del proyecto constructivo y de las conformidades, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras proyectadas.

VII.) Penalidades específicas.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, incumpliera sus obligaciones de correcta ejecución del contrato, por demora, incumplimiento parcial, ejecución defectuosa o incumplimiento de obligaciones contractuales no esenciales, el consorcio podrá optar atendidas las circunstancias del caso por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades justas, adecuadas y proporcionales que se indican a continuación. La cuantía de las penalidades que procedan será propuesta por el responsable del contrato y acordada por el órgano de contratación, atendiendo a los criterios que igualmente se indican. Se justifica la imposición de estas penalidades en razón a los posibles perjuicios que pudieran producirse por la ejecución del contrato en condiciones distintas de las comprometidas.

i. Por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en demora respecto al cumplimiento de los plazos parciales de ejecución establecidos en el programa de trabajo aprobado por el órgano de contratación, se impondrán penalidades diarias en la proporción del 1% del precio del contrato, I.V.A. excluido.

ii. Por incumplimiento de los compromisos no esenciales adquiridos en la oferta.

En el caso de incumplir el compromiso de ejecución del contrato conforme a la tecnología BIM 300, se aplicará una penalidad equivalente al 10% del precio del contrato, I.V.A. excluido.

iii. Por ejecución defectuosa del contrato.

En cada caso de incumplimiento parcial o ejecución defectuosa del contrato, se impondrá una penalidad proporcionada a la gravedad del incumplimiento, el cual será calificado según la siguiente escala:



- **Leve** (penalización equivalente al 2,5% del precio del contrato):

- No aportar en tiempo y forma cualquiera de los documentos requeridos para la correcta ejecución del contrato.
- No acudir a cualquier reunión que convoque el responsable del contrato para el control y coordinación de su ejecución.
- Incumplir los requerimientos del responsable del contrato en orden a la subsanación de defectos en la ejecución de las prestaciones.
- No llevar correctamente el control documental de las condiciones laborales del personal adscrito a la ejecución del contrato y, en su caso, de las condiciones contractuales de las subcontratas que concierte.

- **Grave** (penalización equivalente al 5% del precio del contrato):

- Prestar el servicio con intervención de personal que carezca de la titulación, colegiación o habilitación profesional que resulte exigible en función de la tarea a realizar.
- Sustituir sin la previa autorización del responsable del contrato, a cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo adscrito a la ejecución.
- Resistirse, excusarse o negarse a realizar las tareas de control de la prestación requeridas por el responsable del contrato.
- Incumplir los requerimientos del responsable del contrato en orden a la subsanación de defectos en la ejecución de las prestaciones o demorar su puntual cumplimentación, siempre que el requerimiento tuviera carácter urgente.
- Incurrir por segunda vez en un mismo incumplimiento susceptible de ser calificado como ejecución defectuosa leve; la imposición de penalidad por reiteración excluye la correspondiente al incumplimiento de menor gravedad.

- **Muy grave** (penalización equivalente al 10% del precio del contrato):

- No dar comienzo a la prestación de los servicios contratados el día fijado como inicio en el contrato.
- No informar puntualmente al responsable del contrato de cualquier accidente con daños personales o incidencia grave en las instalaciones que pueda suponer peligro de falta de funcionamiento del saneamiento.

- Incumplir los requerimientos del responsable del contrato en orden a la subsanación de defectos en la ejecución de las prestaciones, siempre que hubiera mediado por lo menos un requerimiento previo instando el debido cumplimiento y persistiera el incumplimiento tras el término de subsanación.
- Prestar el servicio con intervención de inhibición, incumplimiento de normas técnicas imperativas, fraude, deslealtad o abuso de confianza que cause perjuicio grave al consorcio.
- Retrasar el pago de los salarios debidos a todo el personal adscrito a la ejecución del contrato o, en su caso, de las deudas vencidas, líquidas y exigibles con subcontratistas o suministradores que participen en la ejecución del contrato.
- Incurrir por segunda vez en un mismo incumplimiento susceptible de ser calificado como ejecución defectuosa grave o por tercera vez en uno susceptible de calificación como leve; la imposición de penalidad por reiteración excluye la correspondiente al incumplimiento de menor gravedad.

iv. **Por incumplimiento de obligaciones de subcontratación o suministro.**

La celebración de subcontratos incumpliendo las condiciones que se establecen en el artículo 215.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la falta de acreditación ante el responsable del contrato, cuando este lo solicite, de las condiciones concertadas por el contratista que guarden relación directa con los plazos de pago a subcontratistas o suministradores que participen en la ejecución del contrato o del puntual cumplimiento de los pagos, darán lugar a la imposición de penalidades proporcionadas a la gravedad del incumplimiento, cuya cuantía no podrá superar el 50% del importe del subcontrato o el suministro, según proceda. Para la determinación de la cuantía de las penalidades que procedan se atenderá a la posible intencionalidad dolosa o negligente, la trascendencia de los hechos, la implantación sin requerimiento previo de medidas tendentes a que los hechos no se repitan y la reparación de los daños que se hayan podido causar.

6. PLAZO

Dado que el presente contrato de servicios tiene por finalidad la satisfacción de la necesidad administrativa de disponer de un proyecto constructivo que permita

proceder a la posterior ejecución de las obras de construcción de la subestación eléctrica STR Tecnológico, lo que comprende tanto la redacción del proyecto en sí, cuanto el buen fin de su tramitación administrativa previa a la ejecución de las obras, el plazo de duración del contrato se establece en dieciséis (16) meses, con posible prórroga por un plazo máximo de un año, con lo que la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas, será de hasta veintiocho (28) meses.

El plazo de duración del contrato se ha estimado considerando el tiempo necesario para la redacción del proyecto constructivo y el estudio de impacto ambiental, que se establece en cuatro meses, al que ha de añadirse el tiempo necesario para la tramitación administrativa de la conformidad técnica de la empresa distribuidora de la energía eléctrica, la evaluación de impacto ambiental simplificada y la autorización sustantiva de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, que se estima en unos doce meses previendo eventuales demoras en la realización de algún trámite. La previsión de prórroga deviene de la posibilidad de que la tramitación de permisos, autorizaciones y conformidades se demore más allá de lo previsto, pues estos procedimientos se rigen por diferente normativa sectorial que establece unos plazos de tramitación respecto de cuyo cumplimiento son ajenos tanto el contratista como el consorcio, lo que justifica la conveniencia de prorrogar el contrato si el plazo de ejecución inicial no bastara para obtener las autorizaciones necesarias. También por ello, con el fin de limitar al máximo la posibilidad de que el buen fin del contrato se frustre por demoras extraordinarias de esos organismos, en el supuesto de que la prórroga del contrato excediera del plazo máximo previsto sin que la tramitación administrativa del proyecto constructivo hubiera concluido por causas ajenas al contratista, ambas partes tendrán opción de resolver el contrato o ampliar de mutuo acuerdo el período de prórroga.

Se establecen sendos plazos parciales de (i) redacción y presentación del proyecto constructivo ante la compañía distribuidora de energía eléctrica (i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.) para su conformidad técnica, dentro de los dos primeros meses del plazo de ejecución del contrato; (ii) adaptación, en su caso, a la conformidad técnica obtenida del proyecto constructivo y presentación acompañado del estudio de impacto ambiental y restante documentación pertinente ante la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular para la autorización sustantiva del proyecto, dentro del mes siguiente a la conformidad técnica de la compañía distribuidora de energía eléctrica; y (iii) adaptación, en su caso, a los requerimientos de los organismos competentes y las alegaciones admitidas en trámite de información pública del proyecto constructivo, el estudio de impacto ambiental y restante documentación necesaria y nueva presentación ante la Dirección General de Transición Energética y Economía

Circular para autorización definitiva del proyecto, dentro del mes siguiente a la emisión del último de los informes previos a la resolución de autorización.

Se llevará a cabo recepción parcial del proyecto constructivo en la versión para conformidad técnica de la compañía distribuidora de la energía eléctrica. No se llevarán a cabo recepciones parciales de los hitos determinantes de los siguientes plazos parciales por estimarlo innecesario ya que la idoneidad técnica de los documentos correspondientes habrá de ser acreditada mediante el buen fin de la tramitación administrativa del proyecto. La recepción parcial no dará derecho al contratista para solicitar la cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva debido a que la prestación esencial del contrato concierne a la aprobación administrativa del proyecto constructivo definitivo como producto final.

Se establece un plazo de garantía de seis (6) meses contados desde la recepción del contrato.

7. PRESUPUESTO

1.) Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato, determinado por el importe total de las prestaciones durante la duración de este, incluidas sus posibles prórrogas, asciende a **65.000 €**.

Método de cálculo aplicado para determinar el valor estimado: Para un mejor cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, en la determinación del valor estimado del contrato se ha utilizado en la medida de lo posible una metodología basada en la identificación de componentes de la prestación y la determinación de sus costes a partir de unidades de ejecución o unidades de tiempo, análoga a la establecida en los artículos 130 y 131 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para los proyectos de obra pública. De este modo, para el cálculo de los costes directos e indirectos del contrato y otros gastos eventuales, se han tomado en consideración como bases de cálculo principalmente los costes salariales de los profesionales que integran los medios personales adscritos a la ejecución del contrato, esto es, el autor del proyecto, el especialista en redes de servicios eléctricos y el especialista en tramitación ambiental; para este cálculo se ha utilizado el 20º Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería, oficinas de estudios técnicos, e inspección, supervisión y control técnico y de calidad, publicado mediante Resolución de 27 de febrero de 2023 de la Dirección General de Trabajo en el Boletín Oficial del Estado número 59, de 10 de marzo de 2023

(código número 99002755011981).

EQUIPO CONVENIO	SALARIO BASE	ANTIGÜEDAD		PLUS CONVENIO	ANUAL	S.SOCIAL	COSTE ANUAL
	(1)	(2)		(3)	(1)+(2)+(3)	29.90%	
NIVEL 1	28.026,81	10,00	4.204,02	2.349,69	34.580,52	10.339,58	44.920,10
Licenciados y titulados 2 y 3 ciclo	21.731,71	7,00	2.173,17	2.349,69	26.254,57	7.850,12	34.104,69
	21.042,77	5,00	2.104,28	2.349,69	25.496,74	7.623,52	33.120,26
	21.042,77	4,00	1.052,14	2.349,69	24.444,60	7.308,93	31.753,53
NIVEL 2	17.679,83	7,00	1.767,98	2.349,69	21.797,50	6.517,45	28.314,95
Diplomados y titulados 1 ciclo	15.570,73	5,00	1.557,07	2.349,69	19.477,49	5.823,77	25.301,26
Definiente proyectista	15.130,29	0,00	0,00	2.349,69	17.479,98	5.226,51	22.706,49
Oficial administrativo	15.120,07	0,00	0,00	2.349,69	17.469,76	5.223,46	22.693,22

Sobre los costes salariales directos por componentes de la prestación así calculados, se han aplicado los costes indirectos específicamente imputables a las prestaciones de ejecución del contrato por gastos de oficina, reprografía, transporte y seguros.

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA 45/15kv EN EL SECTOR 2 CENTRO DEL PP2 LEGANES TECNOLÓGICO

costes directos

costes directos	plazo/meses	num pers	dedicacion	coste anual	coste total
Autor del Proyecto	4	1	0,60	44.920,10	8.984,02
Especialista en Redes de Servicios electricas	4	1	0,80	34.104,69	9.094,58
Especialista en tramitaciones medioambientales	4	1	0,60	33.120,26	6.624,05
Ingenieros nivel 1	4	1	0,60	28.314,95	5.662,99
deliniantes proyectistas	4	1	0,50	22.706,49	3.784,42
Oficiales administrativos	4	1	0,50	22.693,22	3.782,20
trabajos de topografia	1		1,00	2.000,00	2.000,00
trabajos de geotecnia	1		1,00	4.000,00	4.000,00
total costes directos					43.932,26

costes indirectos

costes indirectos	meses	nº	coste mensual	coste total
gastos oficina (alquiler+servicios+ordenadores)	4	1,00	650,00	2.600,00
repografia, edicion	4	1,00	525,00	2.100,00
Coche turismo	4	2,00	500,00	4.000,00
seguros/fianzas	4	1,00	500,00	2.000,00
total costes indirectos				10.700,00

Y sobre los costes específicos de las prestaciones así calculados se han aplicado los incrementos lineales dispuestos en el artículo 131.1 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a título de gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato. El primero se establece en el 13% para atender los gastos de funcionamiento general de la empresa que no cabe imputar

específicamente a la ejecución del contrato (salarios de los servicios de administración, costes de oficinas centrales y otros gastos comunes a toda la organización), más los gastos financieros y los tributos (excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que no forma parte legalmente del valor estimado del contrato conforme al artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público), y el segundo se establece en el 6% en concepto de beneficio industrial. Estos porcentajes se han determinado aplicando analógicamente lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado mediante Decreto 49/2003, de 3 de abril, y en artículo 131.1.b) del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Aplicando esta metodología, el desglose del valor estimado del contrato es el siguiente:

Elementos del valor estimado	Importe (€)
costes directos de las prestaciones	
Costes salariales	43.932,26
costes indirectos de las prestaciones	
Oficina, reprografía, transporte y seguros	10.700,00
Subtotal costes de prestaciones	54.632,26
Gastos generales (13,00%)	7.102,19
Beneficio industrial (6,00%)	3.277,94
Ajuste de redondeo	-12,39
Valor estimado del contrato	65.000,00

II.) Presupuesto base de licitación.

El presupuesto base de licitación asciende a **78.650 €** y se desglosa en una base imponible de 65.000 € y una cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido al 21% de 13.650 €. Partiendo del plazo inicial de duración del contrato de dieciséis meses, del régimen de pagos establecido y de la previsión de inicio de su ejecución el día 1 de septiembre de 2024, la distribución en anualidades del presupuesto base de licitación es de 31.460 € con cargo a los presupuestos del consorcio del ejercicio 2024 y 47.190 € con cargo al ejercicio 2025.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de Contratos del Sector Público, se indica a continuación el desglose de los costes directos e indirectos y otros gastos calculados para la determinación del presupuesto base de licitación del contrato. La desagregación se ha realizado a partir de los costes calculados en la determinación del valor estimado del contrato, agrupando costes directos e indirectos

y desagregando los costes salariales, siendo de precisar que no es posible realizar desagregación de género de los costes salariales porque el convenio colectivo no establece diferencias retributivas por razón de género ni el contrato requiere una específica distribución del personal por géneros.

Aplicando esta metodología, el desglose del presupuesto base de licitación del contrato es el siguiente:

Elementos del presupuesto base de licitación	Importe (€)
Costes salariales	43.932,26
Subtotal costes directos	43.932,26
Costes indirectos de las prestaciones	10.700,00
Gastos generales de empresa	7.102,19
Beneficio industrial de empresa	3.277,94
Subtotal costes indirectos	21.080,13
Total sin I.V.A.	65.012,39
Ajuste de redondeo	-12,39
Total ajustado sin I.V.A.	65.000,00
Impuesto sobre el valor añadido (21%)	13.650,00
Presupuesto base de licitación	78.650,00

III.) Existencia de crédito y tesorería.

Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a la consignación presupuestaria en la cuenta de pérdidas y ganancias, agrupación Otros gastos de explotación, grupo Compras y gastos, subgrupo Servicios exteriores, cuenta Servicios de profesionales independientes, con estimación de gasto de 159.000€, consignación especificada en el anteproyecto de presupuesto del consorcio para el ejercicio 2024, capítulo 2, Gastos de bienes corrientes y servicios; subcapítulo A), Aprovisionamiento; partida Estudios Técnicos, con estimación de gasto de 155.181,55 €. El presupuesto del consorcio está integrado en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2024 en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.4 de la Ley 15/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2024.

El consorcio dispone de tesorería suficiente para abordar los gastos a los que se refiere este contrato, que se financiará con recursos propios.

Estando previsto el inicio de la ejecución del contrato en el mes de septiembre de 2024 y su término, en defecto de prórroga, en el mes de diciembre de 2025, la

financiación de la contratación queda sujeta, conforme al artículo 117.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, a las reglas que sobre realización de gastos de carácter plurianual resulten aplicables.

IV.) Precio y pago.

El precio del contrato será el de la oferta que haya servido de base para la adjudicación.

Aun cuando para la mejor determinación del valor estimado del contrato se haya utilizado una metodología de identificación de componentes de la prestación y determinación de costes a partir de unidades de ejecución y tiempo, el precio del contrato será entendido como aplicable a tanto alzado a la totalidad de las prestaciones, conforme a los artículos 102.4 y 309.1, párrafo primero, de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 197.a) del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, puesto que se entiende que no es conveniente trasladar la desagregación de costes del valor estimado del contrato, cuya finalidad es que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado, al precio del contrato porque la prestación esencial de este no es de actividad, sino de resultado, ya que la necesidad administrativa esencial a satisfacer es disponer del proyecto constructivo que haya de servir de base para la posterior ejecución de las obras correspondientes.

En el precio se entenderán incluidos todos los gastos derivados de la prestación del servicio, gastos generales, beneficio industrial y los tributos de las distintas esferas fiscales y, en general, cualesquiera gastos que suponga la realización del contrato y, especialmente, los de toda clase de material y equipo que se emplee, los de personal de toda índole que el contratista destine o contrate, desplazamiento, transporte, gestiones, gastos de estudio y cuantos otros desembolsos se originen para o como consecuencia de la ejecución del contrato.

No procede revisión de precios porque no concurren los presupuestos previstos en el artículo 103.2 de la ley, párrafos 1º y 3º, ya que no se trata de un contrato de obras, ni de suministros de fabricación de armamento o equipamiento, ni de suministros de energía y, siendo el período de recuperación de la inversión inferior a cinco años, el sumatorio de las materias primas, bienes intermedios y energía no supera el 20% del presupuesto base de licitación del contrato.

El pago del precio se realizará de forma parcial, conforme a los siguientes hitos:

- 40% a la recepción parcial del proyecto constructivo en la versión para conformidad técnica de la compañía distribuidora de la energía eléctrica del sector.

- 30% tras la presentación del proyecto constructivo adaptado, en su caso, a la conformidad técnica obtenida, acompañado del estudio de impacto ambiental y restante documentación pertinente ante la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular para la autorización sustantiva del proyecto.
- 15% tras la presentación del proyecto constructivo, el estudio de impacto ambiental y restante documentación necesaria adaptados, en su caso, a los requerimientos de los organismos competentes y las alegaciones admitidas en trámite de información pública, una vez emitido el último de los informes previos a la resolución de autorización.
- 15% tras la autorización definitiva del proyecto por la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular.

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria dentro del plazo de los treinta (30) días siguientes a la aprobación de la correspondiente factura, la cual deberá haber sido emitida y presentada dentro del mes siguiente a la prestación de los servicios a que se refiera, realizados de conformidad y a satisfacción de las necesidades a las que el contrato sirve, conforme al artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

1.) Forma de adjudicación.

En términos generales, los consorcios urbanísticos están sujetos para la adjudicación de toda clase de contratos al procedimiento de concurso a resolver según criterios de capacidad técnica y solvencia económica y garantías de toda clase de cumplimiento exacto del planeamiento urbanístico, la urbanización y el destino de las parcelas o solares, ya que así lo establece el epígrafe c) del artículo 76.4 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

En este marco, la elección del procedimiento abierto simplificado ordinario con pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio se justifica, conforme a lo dispuesto en los artículos 131.2 y 159.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, en razón de la naturaleza del contrato, contrato de servicios; de su valor estimado, inferior al umbral de 143.000€ establecido en el artículo 22.1.a); y de la circunstancia de que la ponderación de los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de juicio de valor no supera el 45% del total, habida cuenta de que el objeto del contrato comprende prestaciones que, a tenor de lo establecido en la disposición adicional 41ª de la ley, tienen la condición legal de prestaciones de carácter intelectual; por este mismo motivo, no es posible aplicar en ningún caso, ni aun cuando lo permitiese

el importe del valor estimado, el procedimiento abierto simplificado abreviado ya que lo prohíbe para estos contratos el artículo 159.6 de la ley. Por otra parte, aun cuando la ley considere el procedimiento restringido como *«especialmente apto para la adjudicación de los contratos cuyo objeto tenga prestaciones de carácter intelectual»* (Exposición de Motivos, apartado IV, párrafo 35º), en el presente caso se ha estimado prioritaria la conveniencia de posibilitar la mayor concurrencia de licitadores, para lo cual se emplea el procedimiento abierto.

La prestación de los servicios no requiere que el contratista disponga de una habilitación empresarial específica. No obstante, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, los licitadores, además de acreditar su solvencia específica, habrán de comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios que se enumeran en el apartado referente a medios dedicados o adscritos, por los motivos que allí se indican.

Dado que se trata de un contrato cuya licitación únicamente ha de ser objeto de publicación en el perfil de contratante del consorcio conforme a la regla general de los artículos 63.3.c) y 135.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, y que dicha publicación no tiene coste para el consorcio, no se repercutirá al contratista cantidad alguna en concepto de gastos de publicidad de la licitación a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Atendiendo a la complejidad del contrato, el plazo de presentación de ofertas, que no podrá ser inferior a los quince (15) días naturales a que se refiere el artículo 159.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, será lo más amplio que razonablemente permita que el nuevo contrato pueda comenzar su ejecución en la fecha prevista de 1 de septiembre de 2024. A tal fin, se tendrán en cuenta los posibles trámites de subsanación de documentación aportada para la licitación o necesaria para la adjudicación del contrato, la eventual presentación de ofertas desproporcionadas o anormales y la necesidad de proceder a la formalización del contrato como requisito legal previo al inicio de la ejecución a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.1 de la ley. Por el mismo motivo, con la finalidad de que las ofertas que se presenten puedan ser lo más adecuadas a los trabajos a desarrollar, el director-gerente facilitará, durante el plazo de presentación de ofertas, que las personas interesadas puedan visitar con dicho fin los terrenos donde ha de ubicarse la subestación eléctrica proyectada.

II.) Requisitos generales de solvencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 77.1.b) de la Ley de Contratos del Sector Público y 46 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no cabe exigir clasificación del contratista para la ejecución

del contrato; además, no es posible acreditar la solvencia mediante la posesión de una clasificación determinada puesto que el objeto del contrato no está incluido en el ámbito de ninguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello a los códigos CPV del contrato. En consecuencia, los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional necesaria para la ejecución del contrato mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos:

A. Solvencia económica y financiera

Deberán cumplir uno de los siguientes criterios:

1.- Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de la fecha de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas (artículo 87.1 a) de la Ley de Contratos del Sector Público). Deberá acreditarse un volumen global de negocios anual igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato, es decir, **97.500 €**.

2.- Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales (artículo 87.1.c) de la Ley de Contratos del Sector Público). Deberá acreditarse un patrimonio neto de importe igual o superior al valor estimado del contrato, es decir, **65.000 €**.

Acreditación de los criterios de selección de la solvencia económica y financiera: los licitadores deberán indicar en declaración responsable si cumplen o no todos los criterios de selección requeridos. La acreditación por el licitador mejor postor se efectuará mediante aportación de certificación, nota simple o información análoga expedida por el Registro Mercantil si estuviera inscrito en dicho registro, o en su caso por el registro oficial en que deba estar inscrito, que contenga detalle del volumen global de negocios anual o del patrimonio neto, según proceda, que conste en las cuentas anuales efectivamente depositadas; si estas se encontraran pendientes de depósito, deberá aportar las cuentas anuales acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano competente para ello y del justificante de presentación de las mismas en el registro oficial que proceda. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen global de negocios anual o su patrimonio neto, según proceda, mediante aportación de sus libros de inventarios y cuentas debidamente legalizados.

Justificación de los medios de acreditación de la solvencia económica y financiera: se emplean como alternativos los indicados criterios de general aplicación previstos en la ley, en cuantías adecuadas para el cumplimiento del contrato sin dificultades de

financiación, por considerar que se trata de los medios más accesibles de presentación por parte de los licitadores y de valoración más objetiva, lo que podría favorecer la concurrencia, así como la presentación de un mayor número de pymes.

B. Solvencia técnica o profesional

Deberán cumplir el criterio que les sea aplicable de entre los dos siguientes:

1.- Relación de servicios realizados de igual o similar naturaleza que el objeto del contrato, en el curso de los tres últimos años (artículo 90.1 a) de la Ley de Contratos del Sector Público). Deberá acreditarse la realización de al menos tres (3) prestaciones de servicios relativas a trabajos cuyo grupo de clasificación (tres primeros dígitos) conforme a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV), la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE-2009), la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Unión Europea (NACE Rev. 2) o la clasificación estadística de productos por actividades en la Unión Europea (CPA 2.1), sean coincidentes con los correspondientes a este contrato, y cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea para cada uno de ellos igual o superior al 70% del valor estimado de este contrato, es decir, **45.500 €**, I.V.A. excluido.

Acreditación del criterio de selección: los licitadores deberán indicar en declaración responsable si cumplen o no todos los criterios de selección requeridos. La acreditación por el licitador mejor postor se efectuará mediante aportación de certificados de buena ejecución en los que se indique el importe, las fechas y lugar de ejecución de cada servicio y su destino público o privado, acreditando si se realizó según las reglas por las que se rige la profesión, si se llevó a buen término y si se cumplieron o no los plazos; estos certificados deberán ser expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público, o bien expedidos por el particular destinatario cuando sea privado, si bien, a falta de certificación del destinatario particular, podrá ser sustituida por declaración responsable emitida al efecto por el licitador y acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo, siempre que acrediten la realización de la prestación.

2.- Si la antigüedad de la empresa fuese inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará mediante indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad (artículo 90.1.b) de la Ley de Contratos del Sector Público). Deberá acreditarse disponer del personal o unidades técnicas y de control de calidad adecuados para la correcta ejecución



del contrato, siendo necesario disponer como mínimo de un sistema informático especializado en la gestión de proyectos y obras que proporcione cuando menos capacidades automatizadas de gestión del plan de obra, de las tareas de los distintos participantes en la obra y de las desviaciones en la ejecución.

Acreditación del criterio de selección: los licitadores deberán indicar en declaración responsable si cumplen o no todos los criterios de selección requeridos. La acreditación por el licitador mejor postor se efectuará mediante aportación de la documentación acreditativa de la efectiva disposición del software disponible, con expresión de sus características.

Justificación de los medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional: se emplea el criterio de relación de los trabajos ejecutados en el curso de los últimos años previsto en el artículo 90.1 a) de la ley, por considerar que permite al órgano de contratación disponer de las garantías de ejecución del contrato que razonablemente ofrece la realización previa por parte del contratista de actuaciones similares con buen término en los últimos años. Por otra parte, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 90.4 de la ley, se emplea para las empresas de nueva creación el criterio previsto en el artículo 90.1 b), por entender que permite disponer al menos de la garantía que ofrece la ejecución del contrato disponiendo de unos medios de organización técnica y de control de calidad determinados y revisables.

III.) Medios dedicados o adscritos.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, los licitadores, además de acreditar su solvencia específica, habrán de comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato unos determinados medios personales especializados, constituidos como mínimo por los profesionales que se indica a continuación:

- **Autor del proyecto:** profesional con titulación académica y atribuciones profesionales que le habiliten como redactor de Proyectos de subestaciones eléctricas: Ingeniero Industrial o titulación superior de máster con atribuciones profesionales equivalentes en la materia, con experiencia profesional de, al menos, 3 proyectos de subestaciones eléctricas como autor del proyecto, por importe de honorarios de, al menos, 50.000€ cada uno.
- **Especialista en diseño de subestaciones eléctricas:** profesional con titulación académica de Ingeniero Industrial o titulación superior de máster con atribuciones profesionales equivalentes con experiencia profesional de, al menos siete (7) años en proyectos como especialista en diseño de instalaciones de subestaciones eléctricas

- **Especialista en tramitaciones medioambientales:** profesional en medio ambiente o ciencias ambientales que esté en posesión de la titulación académica de Licenciado en Medio Ambiente, Master o Grado en Ciencias Ambientales, Ingeniero de Montes o titulación superior con atribuciones profesionales equivalentes en la materia, y tenga experiencia profesional de al menos cinco (5) años en proyectos como especialista en estudios de impacto ambiental relacionadas con instalaciones eléctricas.

Acreditación del compromiso: Todos los licitadores deberán aportar una declaración responsable comprometiéndose a adscribir a la ejecución del contrato los medios que se indican en este apartado. El licitador mejor postor deberá aportar declaración especificando los nombres y la cualificación profesional de los integrantes del equipo de trabajo, acompañada de la documentación acreditativa de su respectiva titulación académica y certificado de colegiación como ejerciente de la profesión en el colegio profesional correspondiente, donde figure su número de colegiado, así como sendos certificados de experiencia profesional que atestigüen la intervención del técnico a que se refieran y los datos relevantes respecto al trabajo: función en la que intervino la persona de que se trate, objeto del trabajo, contenido (si no se dedujera del propio objeto), importe y fecha de realización; estos certificados deberán ser expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público, o bien expedidos por el particular destinatario cuando sea privado, si bien, a falta de certificación del destinatario particular, podrá ser sustituida por declaración responsable emitida al efecto por el licitador y acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo, siempre que acrediten la realización de la prestación; en el caso de que el certificado no expresase la participación relevante de técnicos distintos a quien hubiere sido el director de las obras, podrá acreditarse la participación de aquellos mediante declaración responsable de éste, acreditativa de las circunstancias señaladas. Las titulaciones académicas y profesionales habrán de ser españolas o estar homologadas en el ámbito de la Unión Europea. Si alguno de los integrantes del equipo de trabajo no formase parte de la plantilla del licitador (o de uno de los miembros de la unión temporal de empresas en su caso), deberá aportarse además compromiso explícito de colaboración para los trabajos, que deberá estar suscrito por el propio técnico al que afecte.

Justificación de la exigencia de los medios adscritos: en términos generales, se justifica la exigencia específica de estos medios concretos, adicionales a los requisitos generales de solvencia, porque se consideran el equipo mínimo imprescindible para la diligente ejecución del contrato, habida cuenta de la complejidad y el grado de dificultad técnica de las prestaciones y la exigencia legal de que las tareas más relevantes se lleven

a cabo por personal que cuente con una habilitación profesional específica. Concretamente, con la titulación y experiencia requeridas al técnico autor del proyecto se pretende asegurar una cualificación por experiencia en la asunción de la máxima responsabilidad sobre al menos un pequeño número de proyectos de similar naturaleza y relevancia comparable, y con las requeridas al resto de especialistas integrantes del equipo de trabajo se pretende asegurar una cualificación por experiencia específica en su respectivo ámbito de especialización.

Este compromiso se integrará en el contrato, debiendo el contratista efectivamente dedicar a su ejecución los concretos medios a que se haya comprometido y mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo humano designado, sin que se permitan cambios en el mismo salvo por causas extraordinarias, tales como fallecimiento, incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el embarazo, acogimiento o adopción de menores de 6 años o paternidad, excedencia por cuidado de familiar dependiente según legislación vigente y baja voluntaria en la empresa del técnico designado. En tales casos, el contratista estará obligado a comunicar puntualmente y acreditar debidamente las circunstancias de cualquier cambio y contar con autorización previa del consorcio para la efectiva sustitución. El sustituto deberá reunir las condiciones exigidas para el perfil de que se trate, y el consorcio podrá negar la autorización si la alternativa propuesta por el contratista no mantiene o mejora las características de su oferta.

Esta obligación tendrá el carácter de obligación contractual esencial cuyo incumplimiento será causa de resolución del contrato, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 211.1.f) de la Ley de Contratos del Sector Público, debido a su trascendencia para el buen fin de la ejecución en la medida en que se estima muy inconveniente, cuando no imposible, prestar con diligencia los servicios con medios inferiores a los exigidos.

IV.) Criterios de adjudicación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 145 y 146.3, párrafo 2º, de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, que se determinará con arreglo a una combinación de criterios económicos relacionados con costes, cualitativos evaluables de forma automática y cualitativos cuya cuantificación depende de juicio de valor, y articulando el procedimiento de adjudicación en dos fases, siendo eliminatoria la correspondiente a la valoración de los criterios cualitativos. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato comprende prestaciones de carácter intelectual, el precio no es el único factor determinante de la adjudicación (apartado 3.g,

párrafo 2º), y se asigna a los criterios relacionados con la calidad una ponderación que respeta el umbral mínimo del 51% del total en la valoración de las ofertas (apartado 4, párrafo 2º). La inclusión de criterios cualitativos cuya cuantificación depende de juicio de valor responde a la necesidad de analizar las ofertas con la profundidad suficiente que asegure la idoneidad técnica de la propuesta; en este sentido, se considera que hay aspectos de las propuestas que no es correcto medir automáticamente con unas reglas prestablecidas porque se definen en las propias ofertas a criterio de los licitadores, de tal modo que establecer unas reglas fijas de valoración conllevaría limitar a unos mínimos la calidad de la oferta y por ende limitar la idoneidad del contratista.

La totalidad de los criterios de adjudicación podrá alcanzar una puntuación máxima de cien (100) puntos, de acuerdo con el siguiente desglose:

Criterios objetivos de adjudicación	Puntos
Criterios económicos relacionados con costes	
Oferta económica	hasta 45
Criterios cualitativos evaluables de forma automática	
Experiencia adicional del autor del proyecto	hasta 10
Experiencia adicional del especialista en diseño de subestaciones eléctricas	hasta 6
Experiencia adicional del especialista en tramitaciones medioambientales	hasta 4
Ejecución conforme a tecnología BIM 300	5
Criterios cualitativos cuya cuantificación depende de juicio valor	
Conocimiento técnico de los trabajos a realizar	hasta 15
Planificación de los trabajos	hasta 7,5
Estructura organizativa	hasta 7,5

El procedimiento de adjudicación se desarrollará en dos fases sucesivas, en la primera de las cuales se valorarán, en sesiones separadas de la mesa de contratación, los criterios cualitativos cuya cuantificación depende de juicio de valor y los evaluables de forma automática, por este orden. Para poder continuar en el proceso de adjudicación, el licitador deberá obtener un mínimo de 27,5 de los 55 puntos de esta fase. Las ofertas que no alcancen ese umbral mínimo se considerarán técnicamente de calidad inaceptable y no serán tomadas en consideración para la determinación de la oferta más ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el intervalo de calidad técnica suficiente, se declarará desierta la licitación.

A. Criterios económicos relacionados con costes: máximo 45 puntos

La valoración de la oferta respecto a criterios relacionados con los costes tendrá un máximo de 45 puntos, evaluables exclusivamente mediante fórmula matemática en función del precio ofertado por el licitador, interpolando linealmente en dos tramos separados por la media aritmética de los precios de todas las ofertas admitidas a la

licitación, aplicables en función de si el precio ofertado es superior o inferior a esta media. Así, si el precio ofertado fuese superior a la media aritmética, la interpolación se realizará linealmente entre el presupuesto base de licitación, al que se asignarán cero (0) puntos, y la media aritmética de las ofertas, a la que se asignarán cuarenta (40) puntos, redondeando las puntuaciones al segundo decimal; sin embargo, si el precio ofertado fuese igual o inferior a la media de las ofertas, la interpolación se realizará linealmente entre la media aritmética de las ofertas, a la que se asignarán cuarenta (40) puntos, y el precio de la oferta de menor valor, a la que se asignarán cuarenta y cinco (45) puntos, redondeando igualmente las puntuaciones al segundo decimal. Para ello se aplicará la fórmula que proceda de entre las dos que se indica a continuación, salvo que se presentara una sola oferta, a la que se le asignarán todo caso cuarenta y cinco (45) puntos.

TRAMO A SI LA OFERTA PRESENTADA ES SUPERIOR AL PRESUPUESTO MEDIO

PTIPO 0 puntos

PMEDIO 40 puntos

OFERTA (X) PUNTOS(OFERTA) puntos

$$PUNTOS(OFERTA(X)) = 40 - 40 \frac{(OFERTA(X) - PMEDIO)}{(PTIPO - PMEDIO)}$$

TRAMO B SI LA OFERTA PRESENTADA ES INFERIOR AL PRESUPUESTO MEDIO

PMINIMO 45 puntos

PMEDIO 40 puntos

OFERTA (X) PUNTOS(OFERTA) puntos

$$PUNTOS(OFERTA(X)) = 45 - 5 \frac{(OFERTA(X) - PMINIMO)}{(PMEDIO - PMINIMO)}$$

Siendo: Puntos (Oferta X), la valoración de la oferta de que se trate; Oferta(x), el precio de la oferta a valorar; P(medio), la media aritmética de los precios de todas las ofertas admitidas a la licitación; P(tipo), el presupuesto base de licitación; y P(mínimo), el precio de la oferta de menor importe.

Justificación del criterio de valoración: esta doble fórmula de valoración del precio asigna la puntuación más alta al licitador que oferte un precio inferior y la más baja al que presente una oferta económica con precio superior, recibiendo la máxima puntuación la oferta más económica y ningún punto la que iguale el presupuesto base de licitación; el resto de los puntos se reparte atendiendo al ahorro que cada proposición, por sí misma, supone para el consorcio, con la peculiaridad de que la constitución en dos tramos pretende mantener el criterio de que la mayor puntuación siempre sea a la oferta más económica, pero establecer al propio tiempo una cautela frente a ofertas anormalmente bajas mediante la aplicación de dos pendientes de puntuación diferenciadas, más vertical para las ofertas por debajo de la media

aritmética de los precios de todas las admitidas y más suave para las que estén por encima de esa media, buscando con ello mermar la ponderación de ofertas de muy bajo precio que pudieran comprometer la calidad del trabajo, lo que se entiende especialmente aconsejable en un contrato de prestaciones intelectuales y presupuesto relativamente reducido como el presente. Por tanto, el modelo permite adecuarse eficazmente al cumplimiento de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, y, a su vez, contribuir al control de gasto y eficiencia de los fondos públicos, sin menoscabar la calidad y permitiendo una valoración comparativa de todas las ofertas ponderándolas a un valor común conforme a criterios racionales de gobernanza.

B. Criterios cualitativos evaluables de forma automática: máximo 25 puntos

La valoración de la oferta respecto a criterios cualitativos evaluables de forma automática tendrá un máximo de 25 puntos, con la siguiente distribución:

Criterios cualitativos evaluables de forma automática	Puntos
Experiencia adicional del autor del proyecto	hasta 10
Experiencia adicional del especialista en diseño de subestaciones eléctricas	hasta 6
Experiencia adicional del especialista en tramitaciones medioambientales	hasta 4
Ejecución conforme a tecnología BIM 300	5

i. Experiencia del autor del proyecto:

Se asignarán hasta 10 puntos en función de la experiencia adicional del autor del proyecto como redactor de proyectos de subestaciones eléctricas, por encima del mínimo previsto como requisito adicional de solvencia. La puntuación se asignará atribuyendo 2 puntos por cada proyecto redactado como autor por encima del mínimo exigido de tres proyectos, hasta un máximo de 10 puntos, correspondientes a una experiencia de redacción de ocho proyectos, conforme a la siguiente distribución:

Proyectos de subestaciones eléctricas redactados como autor					
Nº de proyectos	4	5	6	7	8 o más
Puntos	2	4	6	8	10

ii. Experiencia del especialista en diseño de subestaciones eléctricas:

Se asignarán hasta 6 puntos en función de la experiencia adicional del especialista en diseño de subestaciones eléctricas, por encima del mínimo previsto como requisito adicional de solvencia. La puntuación se asignará atribuyendo 2 puntos por el primer año adicional completo de experiencia por encima del mínimo exigido de siete años, más 1 punto por cada año completo subsiguiente, hasta un máximo de 6 puntos, correspondientes a una experiencia total superior a doce años, conforme a la

siguiente distribución:

Años de experiencia en diseño de subestaciones eléctricas					
Nº de años	8	9	10	11	12 o más
Puntos	2	3	4	5	6

iii. Experiencia del especialista en medio ambiente:

Se asignarán hasta 4 puntos en función de la experiencia adicional del especialista en tramitaciones medioambientales, por encima del mínimo previsto como requisito adicional de solvencia. La puntuación se asignará atribuyendo 0,5 puntos por cada uno de los dos primeros años adicionales completos de experiencia por encima del mínimo exigido de cinco años, más 1 punto por cada año completo subsiguiente, hasta un máximo de 4 puntos, correspondientes a una experiencia total superior a diez años, conforme a la siguiente distribución:

Años de experiencia en tramitaciones medioambientales					
Nº de años	6	7	8	9	10 o más
Puntos	0,5	1	2	3	4

Justificación de los criterios de valoración vinculados a la experiencia: considerando que las cualidades del personal adscrito a la ejecución del contrato constituyen la base de la correcta ejecución de las prestaciones, se estima que la superior experiencia de dicho personal respecto del mínimo que se entiende estrictamente necesario, aumenta las posibilidades de que pueda atender correctamente a una mayor variedad de situaciones adversas no previstas en el diseño de las obras proyectadas, así como de optimizar la planificación de las tareas u ofrecer una mayor variedad de alternativas cuya viabilidad ya haya sido contrastada anteriormente en otras obras. El reparto de la puntuación entre los diferentes criterios atiende a la importancia relativa que se atribuye a la superior cualificación por experiencia del técnico autor del proyecto y los distintos especialistas, sobre la calidad esperada del resultado final de los trabajos. Se limita la valoración de la experiencia a unos máximos de proyectos y años, a fin de moderar la inevitable restricción del principio de libre concurrencia.

iv. Compromiso de ejecución conforme a tecnología BIM 300:

Se otorgarán 5 puntos en función del compromiso formal por parte del licitador de ejecutar el contrato conforme a la tecnología BIM (Building Information Modelling, modelado de información para la edificación) con nivel de desarrollo (LOD, Level of Development) 300. Se asignarán cinco (5) puntos al licitador que presente declaración en la que se comprometa a ejecutar el contrato conforme a esta tecnología, y cero (0)

puntos al licitador que no la presente.

Justificación del criterio de valoración: la ejecución del contrato conforme a estándares reglados en el ámbito de la innovación mediante herramientas digitales de información en la construcción, permite incorporar una metodología de trabajo basada en la digitalización y en la colaboración entre agentes a lo largo de todo el ciclo de vida de una edificación o infraestructura, lo que redunda en una mayor eficiencia de la inversión ya que permite conseguir una reducción de riesgos e incertidumbres, un incremento en la calidad y la mejora del mantenimiento a largo plazo de las instalaciones. Todo ello es crucial para la seguridad, la sostenibilidad y la definición y cálculo del ciclo de vida de las obras programadas.

Acreditación del compromiso: la acreditación del compromiso de ejecución conforme a tecnología BIM será obligatoria para el licitador propuesto como adjudicatario; a tal fin, deberá aportar el plan de ejecución BIM que se proponga implementar, especificando objetivos, organización y estructuración de los modelos, gestión de la información, sistema de clasificación de carpetas, equipo, roles y responsabilidades, flujo de trabajo y entregables BIM. Este compromiso se integrará en el contrato, debiendo el contratista hacer entrega del proyecto constructivo acompañado de la información BIM correspondiente (modelo federado según tabla y formato abierto IFC 2x3 con el nivel de información correspondiente por disciplina, y los modelos nativos individuales, informe de colisiones en formato Excel, obtención de mediciones, infografías en formato .jpg y .tiff; y recorridos visuales en formato .avi o similar y manual del modelo BIM que contendrá la información actualizada del plan de ejecución BIM, con el objeto de que sirva de documento de ayuda para la ejecución de las obras).

C. Criterios cualitativos cuya cuantificación depende de juicio de valor: máximo 30 puntos

La valoración de la oferta respecto a criterios cualitativos cuya cuantificación depende de juicio de valor tendrá un máximo de 30 puntos, aplicando los siguientes criterios:

Criterios cualitativos cuya cuantificación depende de juicio de valor	Puntos
Conocimiento técnico de los trabajos a realizar	hasta 15
Planificación de los trabajos	hasta 7,5
Estructura organizativa	Hasta 7,5

i. Conocimiento técnico de los trabajos a realizar:

Se asignarán hasta 15 puntos en función del estudio y análisis que lleve a cabo el licitador de las características específicas del proyecto constructivo a la luz de los condicionantes técnicos para su redacción, significadamente las condiciones impuestas por la empresa distribuidora de energía eléctrica en su conformidad técnica de 7 de julio de 2023. Para la valoración se atenderá a las soluciones urbanísticas, constructivas y de las instalaciones que recomiende, así como el análisis de su viabilidad para identificar sus impedimentos, si los hubiese, y la propuesta de medidas correctoras para la óptima ejecución de las obras.

ii. Planificación de los trabajos:

Se asignarán hasta 7,5 puntos en función la coherencia, idoneidad y viabilidad del programa de trabajo que proponga el licitador para la redacción y tramitación del proyecto en los plazos previstos. Para la valoración se atenderá a la coherencia de la planificación respecto del contenido de los trabajos a realizar, atendiendo a la programación de las actividades y los hitos parciales de ejecución.

iii. Estructura organizativa:

Se asignarán hasta 7,5 puntos en función la coherencia, idoneidad y viabilidad de la estructura organizativa y las funciones de los integrantes del equipo de trabajo que proponga el licitador para la ejecución del contrato. Para la valoración se atenderá a las tareas y grado de dedicación de cada miembro del equipo y la adecuación de su composición para la ejecución de las prestaciones, así como su coherencia con la planificación de los trabajos planteada.

Para la valoración de la oferta, los licitadores presentarán una memoria de extensión máxima de quince (15) páginas UNE A-4 y tamaño de letra no inferior a diez puntos tipográficos, la cual no podrá incluir información ni sobre el precio ofertado, ni sobre los compromisos relativos a los criterios cualitativos evaluables de forma automática, y deberá expresar de forma concisa, clara y ordenada las circunstancias determinantes de su valoración material. La falta de presentación o la presentación inválida de la documentación correspondiente a un criterio de adjudicación, así como la ausencia de rigor, coherencia, adecuación, detalle y concreción que imposibilite racionalmente identificar alguna circunstancia determinante de su valoración material, supondrán la no obtención de puntos en ese criterio; a tal efecto, la memoria técnica no será tenida en consideración en lo que exceda de la extensión máxima indicada.

La valoración se llevará a cabo por los servicios técnicos del consorcio, debiendo

ser suscrita por el técnico o técnicos que la realicen. En la valoración que hayan de realizar, los servicios técnicos atenderán tanto a los parámetros materiales y puntuaciones máximas que se indica para e cada criterio, cuanto a los aspectos formales de la exposición que realice el licitador de las circunstancias determinantes de la evaluación, atendiendo a su rigor, coherencia, adecuación, detalle y concreción, para lo cual aplicarán un factor de corrección a la puntuación asignada que no podrá ser superior a la unidad para aquella exposición de las circunstancias determinantes de la evaluación que se califique como excelente, ni inferior a ocho décimas partes (80%) para toda exposición que permita determinar de forma indubitada la circunstancia de que se trate; a las exposiciones que susciten dudas sobre el alcance de las circunstancias determinantes de la valoración de un determinado parámetro material, no se les podrá aplicar un factor de corrección superior a cuatro décimas partes (40%).

Justificación del criterio de valoración: el mejor conocimiento técnico de los condicionantes del informe de conformidad técnica de i-DE donde se detallan todas las acciones a realizar requiere del licitador un análisis de las características de la actuación y un estudio pormenorizado que le permita identificar posibles mejoras y detectar la necesidad o no de los diferentes estudios a realizar, configurando una planificación de los trabajos y una estructura organizativa acordes a las necesidades, todo lo cual tiene incidencia positiva sobre la calidad del trabajo y permite que el consorcio pueda, en su caso, beneficiarse de las observaciones y conclusiones obtenidas.

V.) Ofertas desproporcionadas o anormales.

El precio ofertado será el criterio objetivo que se tomará en consideración a los efectos de apreciar, en su caso, que una oferta resulte inviable por haber sido formulada en términos que la hagan anormalmente baja, a cuyo efecto se tomarán en consideración los parámetros indicados en los apartados 1 a 4 del artículo 85 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

Justificación del precio como único criterio de determinación de ofertas anormales: Se justifica la consideración del precio como único criterio de determinación de ofertas anormales o desproporcionadas porque la relevancia económica en términos de costes de ejecución del contrato que tienen los restantes criterios de adjudicación, ya está contemplada en la desagregación de costes del presupuesto base de licitación (que a su vez constituye uno de los parámetros de valoración del precio ofertado), según se expresa en el análisis de costes que se incluye en el apartado referente al valor estimado del contrato. En concreto, el criterio de experiencia adicional tiene su reflejo en los costes de personal, mientras que los de análisis de condicionantes técnicos del proyecto y de metodología, organización y programación de los trabajos van implícitos

en los costes indirectos de las prestaciones y los gastos generales de empresa. Por tanto, los criterios de adjudicación distintos del precio no tienen relevancia autónoma para determinar objetivamente una eventual inviabilidad de alguna oferta, sino que repercuten sobre los costes de la prestación; por ello, se entiende que el precio es el criterio determinante y más apto para determinar la viabilidad de las ofertas.

9. TÍTULO COMPETENCIAL

A tenor de lo expuesto, procede la emisión de una resolución por la que se disponga la incoación de un procedimiento de contratación pública administrativa típica para la prestación por cuenta del consorcio de los servicios de redacción del proyecto constructivo de ejecución de la subestación eléctrica STR Tecnológico del ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid), conforme a lo conforme a las especificaciones emitidas por la empresa distribuidora de la energía eléctrica del sector.

La resolución incluye todo el contenido normativamente previsto para la memoria de las contrataciones públicas administrativas típicas en los artículos 28 y 116.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y 73.2 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esto es, la necesidad del contrato para el cumplimiento y realización de los fines institucionales, determinando con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas y la directa, clara y proporcional idoneidad del objeto del contrato para satisfacerlas, y las características e importe calculado de las prestaciones, valorando la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos positivos y promoviendo la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información.

Junto a este contenido mínimo se considera conveniente recoger también, por motivos de gobernanza, el conjunto de decisiones de oportunidad más relevantes del procedimiento, que, en puridad, han de quedar reservadas al órgano de contratación conforme a la ley: elección del procedimiento de licitación, requisitos de participación, criterios de solvencia y de adjudicación y condiciones especiales de ejecución del contrato, valor estimado con indicación de todos los conceptos que lo integran e informe de insuficiencia de medios al tratarse de un contrato de servicios, y decisión de introducir limitaciones en la división en lotes del objeto del contrato (artículos 116.4 y 99.4 de la ley, respectivamente).

Adicionalmente se han incluido, por los mismos motivos de gobernanza, las decisiones de oportunidad que afectan al contenido de los pliegos conforme a los

artículos 122 de la ley y 67 del reglamento: codificación del objeto del contrato en las clasificaciones CNAE y CPV (a las que se han añadido las clasificaciones NACE y CPA al haber utilizado como requisito de solvencia profesional la relación de servicios de similar naturaleza que el objeto del contrato); grupo, subgrupo y categoría de clasificación; derechos y obligaciones de las partes; lugar de entrega del servicio; cesión del contrato y subcontratación; sistema de determinación del precio; existencia de crédito; régimen de pagos; plazo de duración y prórroga; programa de trabajo; criterios para la determinación de ofertas anormales; condiciones especiales de ejecución; causas especiales de resolución; penalidades; comprobación de la calidad al tiempo de la recepción del contrato y plazo de garantía. Asimismo, se ha incorporado al expediente un borrador de pliego de prescripciones técnicas de la ejecución del contrato que determina las que han de regir para la realización de las prestaciones conforme al artículo 124 de la ley, definiendo sus calidades y condiciones sociales y ambientales. Todo ello sin perjuicio de que los documentos finales de la contratación que se aprueben tras la tramitación del procedimiento, puedan incorporar variaciones en alguna de estas decisiones cuando así lo requiera el cumplimiento de normas, los principios de buena administración o la atención de circunstancias sobrevenidas.

La potestad de acordar el inicio de un procedimiento de contratación corresponde al órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116.1 de la ley y 73.1 del reglamento mencionados. El órgano de contratación del Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico es el consejo de administración como órgano superior al que corresponden todas las funciones y competencias del consorcio salvo las que corresponden al presidente y en las que en su caso se deleguen, conforme dispone el artículo 11 de los estatutos.

La instrucción del procedimiento de contratación compete al director-gerente del consorcio en ejercicio de sus funciones de gestionar la ejecución de todos los asuntos encomendados por el consejo de administración o por su presidente y bajo la aprobación de estos órganos cuando su actuación genere vinculación jurídica con terceros, que se le atribuye en el epígrafe D) del artículo 16 de los estatutos. Sin perjuicio de las atribuciones del director-gerente, la tramitación del procedimiento de contratación podrá realizarse a través de la unidad administrativa de la Comunidad de Madrid Subdirección General de Consorcios Urbanísticos de la Dirección General de Suelo, en ejercicio de las funciones de apoyo a la contratación de consorcios urbanísticos que derivan de lo dispuesto en el epígrafe p) del artículo 6.2 del Decreto 235/2023, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

En todo caso, el consejo de administración puede delegar conforme a la ley el ejercicio de sus competencias en la forma y medida que considere oportunas para el servicio de los intereses generales, entre los que es relevante que se pueda contar cuanto antes con los proyectos constructivos que permitan realizar las obras y restantes actuaciones conducentes al suministro de electricidad en condiciones definitivas en los terrenos urbanizados por el consorcio, ya que es éste uno de sus fines primordiales.

A tal efecto, para facilitar la agilidad en la adjudicación del contrato que permita destinar el mayor tiempo posible a la presentación de ofertas por los licitadores que sea compatible con la fecha del 1 de septiembre de 2024 prevista para el inicio de la prestación de los servicios, y teniendo en cuenta la relativamente escasa relevancia económica de los trabajos a ejecutar, se estima que, una vez incoado este procedimiento de contratación en las condiciones antedichas, la eficacia en la gestión de la actuación aconseja delegar el ejercicio de las competencias del órgano de contratación requeridas para la tramitación y aprobación de los procedimientos de contratación y de adjudicación del contrato, sin perjuicio de que el consejo de administración conserve la competencia nuclear de los órganos de contratación de resolver posteriormente el procedimiento de adjudicación mediante la adjudicación del contrato propiamente dicha.

Considerando la naturaleza del consejo de administración del consorcio en cuanto que órgano de gobierno que encarna la integración de los intereses autonómicos y locales en el desarrollo urbanístico, se entiende adecuado que la delegación de las competencias resolutorias de aprobación de los pliegos y el expediente de contratación, el gasto y la apertura del procedimiento de adjudicación, que corresponden al consejo de administración como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en los artículos 117.1, 122.5 y 124 de la Ley de Contratos del Sector Público, haya de ejercerse de forma mancomunada, es decir, de común acuerdo, entre el vocal en representación de la Comunidad de Madrid competente en materia de consorcios urbanísticos, Director General de Suelo, y el vocal en representación del Ayuntamiento de Leganés que a tales efectos determine.

Del mismo modo, para facilitar igualmente la tramitación de los procedimientos y teniendo en cuenta que la normativa atribuye al órgano de contratación algunos actos de tramitación de bajo contenido resolutorio o meramente de trámite tanto en la instrucción del procedimiento de contratación, como puede ser la propia tramitación del expediente en su conjunto (artículo 138 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), cuanto en la instrucción del procedimiento de adjudicación del contrato, como pueden ser la emisión del anuncio de licitación, la

designación nominativa de los miembros de la mesa de contratación o la publicación de aclaraciones vinculantes al pliego de cláusulas administrativas particulares si se diese el caso (respectivamente, artículos 136.1, 326.4 y 138.3 de la Ley de Contratos del Sector Público), se considera oportuno facultar específicamente al director-gerente del consorcio para que lleve a cabo la tramitación de los procedimientos e incluir en la encomienda el ejercicio delegado de las escasamente relevantes competencias de instrucción, esto es, las que no son resolutorias, que corresponden al consejo de administración como órgano de contratación del consorcio.

10. RESOLUCIÓN

Conforme a lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas como director-gerente del consorcio, propongo a V.I. elevar a la consideración del consejo de administración del organismo la aprobación del procedimiento de contratación de los servicios de consultoría y asistencia técnica y urbanística al consorcio para la redacción del proyecto constructivo de ejecución de la subestación eléctrica STR Tecnológico de referencia, mediante la emisión de un acuerdo con el siguiente contenido:

«**PRIMERO.** Acordar el inicio del procedimiento de contratación pública administrativa típica de los servicios de consultoría y asistencia técnica y urbanística al Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico para la redacción del proyecto constructivo de ejecución de la subestación eléctrica STR Tecnológico en el ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid), expediente CS/01/2024, que se llevará a cabo por procedimiento abierto simplificado.

SEGUNDO: Ordenar la remisión del expediente de contratación a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para que, en el marco del convenio suscrito para la prestación de servicios de asistencia jurídica al consorcio, emita el preceptivo informe al pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación que se elabore.

TERCERO: Delegar de forma mancomunada en el vocal en representación de la Comunidad de Madrid competente en materia de consorcios urbanísticos, Director General de Suelo, y el vocal en representación del Ayuntamiento de Leganés que se determine, la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, el expediente de contratación, el gasto y la apertura del



procedimiento de adjudicación del contrato.

CUARTO: Facultar al director-gerente del consorcio para que lleve a cabo la tramitación de los procedimientos necesarios en orden a la adjudicación del contrato por el consejo de administración, incluyendo en la encomienda el ejercicio delegado de las competencias de instrucción que correspondan al consejo de administración como órgano de contratación del consorcio.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa a tenor de lo dispuesto en el artículo 53.3 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en relación con los artículos 2 y 25 de los estatutos del consorcio, y frente al mismo cabe interponer recurso de reposición ante el consejo de administración en el plazo de un mes contado a partir de la notificación del presente acto conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado correspondiente en el plazo de dos meses de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir».

No obstante, V.I. resolverá.

En Madrid, a fecha de la firma

Firmado digitalmente por: MARCIEL MIRANDA CARLOS
Fecha: 2024.05.15 16:14
EL DIRECTOR-GERENTE DEL CONSORCIO

Carlos Marciel Miranda

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO